

C/ VALERIA ROMANE TRUJILLO RIVAS

**TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y TENENCIA ILEGAL DE PARTES
DE ARMAS DE FUEGO**

RUC N° 2100560953-1

RIT N° 276-2023

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

Visto, oído y considerando:

PRIMERO: Individualización del tribunal e intervinientes. Que el día dieciséis de agosto del año en curso, ante esta sala del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los jueces don José Rodríguez Guerra, quien presidió las audiencias respectivas, doña Esperanza Carmona Araya como integrante, y Javiera López Ossandón en calidad de redactora, se llevó a efecto, en modalidad híbrida, audiencia de juicio oral relativa a los autos Rol Interno N°276-2023, seguidos en contra de **VALERIA ROMANÉ TRUJILLO RIVAS**, Cédula Nacional de Identidad N° 8.510.331-8, nacida en Santiago, el 20 de diciembre de 1975, 47 años, soltera, dueña de casa, domiciliada en Coronel N°8786 de La Granja, la cual fue representada por la abogada de la Defensoría Penal Pública Daniela Quiroz Becerra.

El Ministerio Público actuó en esta causa representado por el Fiscal Sr. Leda Astorga San Martín.

SEGUNDO: Acusación. Que los hechos al tenor del auto de apertura de juicio oral que se adjuntó, son los siguientes, los cuales se transcriben íntegramente:

“Se estableció en virtud de una denuncia y de varias diligencias investigativas que el domicilio ubicado en calle Coronel n° 8786 de la comuna de La Granja era utilizado como punto de venta de droga.

De esta forma, en virtud de una orden de entrada y registro autorizada por este Tribunal, funcionarios policiales el día 02 de marzo de 2022 aproximadamente a las 14:45 horas ingresaron al domicilio de calle Coronel n° 8786 de la comuna de La Granja, sorprendiendo al interior de este a la imputada Trujillo Rivas, blanco investigativo, quien sin contar con la autorización competente mantenía en su poder sobre la mesa del comedor al interior de un estuche 55 envoltorios contendores de cocaína base con un peso bruto de 8.43 gramos y la suma de \$57.000; sobre la mesa de la cocina un cuaderno con papeles recortados para dosificar droga; sobre la cómoda de su habitación 8 bolsas de nylon contendoras

de cannabis sativa con un peso bruto de 8.76 gramos y las sumas de \$30.000 y \$107.000 en dinero en efectivo, además de un cargador de pistola calibre 9mm. Además en una segunda habitación al interior de un closet la imputada mantenía 07 bolsas contendoras de cocaína base con un peso bruto de 276.40 gramos.”
SIC.

Los hechos antes descritos, a juicio del Ministerio Público, son constitutivos del delito de **TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES**, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación al artículo 1° de la Ley N° 20.000, y el delito de **TENENCIA ILEGAL DE PARTES DE ARMAS DE FUEGO**, previsto y sancionado en el artículo 9° inciso primero en relación con el artículo 2° letra b) de la Ley 17.798, ambos delitos en grado de desarrollo CONSUMADO, atribuyéndole participación en calidad de AUTORA.

Sobre modificatorias de responsabilidad penal, el ente persecutor señala que perjudica a la encartada, por el delito de tráfico de drogas, la circunstancia agravante de responsabilidad penal establecida en el artículo 12 N°16 del Código Penal.

En razón de lo anterior solicita se impongan a la acusada las siguientes penas: a) Por el delito de **TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES**, la pena de **DOCE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, el pago de una **MULTA DE CUATROCIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES** y las accesorias legales establecidas en el artículo 28 del Código Penal; b) Y por el delito de **TENENCIA ILEGAL DE PARTES Y PIEZAS DE ARMA DE FUEGO**, la pena de **CINCO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, las accesorias legales del artículo 29 del Código Penal; el comiso del dinero y demás especies incautadas, y la expresa condenación en costas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Además, pide se ordene la incorporación de sus huellas genéticas en el registro de condenados de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.970.

TERCERO: Alegatos de los intervinientes. Que en los alegatos de inicio la Fiscalía señaló, en lo medular, que la investigación se inicia de manera deformalizada, donde se denuncia el domicilio de la acusada como un lugar de venta de drogas, se obtiene orden judicial para ingresar y se sorprende a la imputada en posesión de droga y del cargador, hechos que se probarán en virtud de la prueba ofrecida por el Ministerio Público.

Por otro lado, la defensa, manifestó que se solicitará recalificar el delito de tráfico de drogas por el del artículo 4 de la Ley 20.000 respecto de la pasta base de cocaína, y por la falta de consumo en relación a la marihuana. Sobre el cargador se solicitará absolución por falta de participación, para lo cual la defensa se ha hecho valer de la misma prueba del Ministerio Público y rendirá prueba propia.

Que, en su alegato de clausura el Ministerio Público sostuvo, en resumen, que se acreditó el inicio de la causa, mediante el oficio enviado por la PDI para investigar tráfico barrial en el domicilio de la comuna de La Granja, donde habían dos blancos, dos mujeres, y a propósito de las diligencias realizadas que fueron explicadas por los funcionarios policiales piden a la fiscal la técnica de agente revelador, la cual fue autorizada. El 25 de enero utilizan esa técnica a través del actuar de Víctor Valladares, donde una mujer le vende por una ventana, a la cual no le ve el rostro, con ello se obtiene una orden judicial de entrada y registro, pudiendo verificar que efectivamente allí se encontraba droga, cocaína y marihuana, encontrando además un cargador de un arma. Con las pericias se pudo establecer que la droga incautada era cocaína y cannabis sativa, y sobre el cargador, con los dichos del perito, se pudo verificar que las municiones de 9 mm eran aptas para el cargador. Sobre lo argumentado por la defensa respecto de la cannabis y que ésta era para el consumo, señala que la marihuana pesó 8 gramos, y se acreditó que la acusada tenía gran cantidad de droga dosificada y otro tanto lista para dosificar. Sobre el desconocimiento de que mantenía un cargador de un arma en su velador, es poco creíble, por cuanto claramente se ve que es un cargador de arma de fuego. Finaliza sosteniendo que los hechos de la acusación y la participación de la encartada se han acreditado más allá de toda duda razonable, solicitando veredicto condenatorio.

La defensa, en lo medular, solicita en lo principal la absolución de su representada por el delito de tráfico de drogas por falta de participación, pues con la declaración de la acusada, se probó que en el domicilio habían más personas. Para ello señala la declaración de Jordan Manríquez quien no entró al domicilio e indicó que era una mujer de contextura gruesa quien había vendido la droga, no pudo corroborar cuantas personas habían en la casa al momento del allanamiento, ni cuantas viven allí, no pudo aseverar que la acusada era quien vendía droga en dicho inmueble. Luego, Víctor Valladares, quien era el agente revelador, no pudo identificar a la persona que le vendió, dijeron que ese domicilio había sido investigado porque lo tenían en otra investigación de años atrás, agrega que uno de los dormitorios era

de ella y eso es todo lo que se tiene, no hay forma de corroborar que Valeria o las hermanas eran los blancos, sólo aparece la dirección y que al ingresar al domicilio su defendida estaba en el lugar. No hay prueba suficiente para condenar a la acusada, faltó corroboración. En subsidio, solicitó recalificación por el delito de microtráfico. Aseveró que, de la cantidad de droga encontrada, habría que descontar la marihuana, pues el agente encubierto solo compró cocaína base, y con la documental de la defensa se probaron los problemas de salud de la acusada. Sobre la tenencia del cargador, los testigos y la acusada mencionaron que varias personas iban a la casa, incluso uno de los funcionarios dijo que vio menores entrar, la caja del velador estaba al acceso de otras personas, no es posible estimar que su representada sabía que estaba allí por el solo hecho de aseverar Víctor Valladares que ese dormitorio era de la acusada porque habían fotos y ropa. No se adjuntó ninguna foto de las dependencias de la casa y no se verificó en el informe como esa arma era apta.

La fiscal, replicando, manifestó que Valladares explicó claramente quienes eran los blancos investigativos, observaron acciones compatibles a la venta de droga, en este tipo de poblaciones no se puede sacar fotografías o determinar quien vivía en esa casa, pero los blancos eran la imputada y su hermana, no es que no se acuerde de quien le vendió, sino que por las características que apreció no pudo afirmar que le vendió la acusada. Además, el artículo 3° de la Ley N°20.000 no sólo utiliza la palabra comercialización, sino que también la tenencia, la guarda, la posesión, y eso fue lo descubierto por los funcionarios policiales el día 2 de marzo. En su réplica, la defensa, mencionó que sólo se detuvo a una de las personas nombradas en la denuncia, no hay congruencia entre el relato de Víctor Valladares y la acusación, y sobre los verbos rectores, éstos también están incluidos en el artículo 4°.

CUARTO: Declaración de la acusada. Que, en la oportunidad señalada en el artículo 326 del Código Procesal Penal, previamente advertida sobre sus derechos, en especial respecto al derecho a guardar silencio, la acusada Valeria Trujillo prestó declaración voluntariamente. Relató, en resumen, que cuando la policía llegó a su casa, eran las 2 y media a 3 de la tarde, la puerta de la casa estaba abierta, ella estaba sentada en la mesa del comedor, encima de la mesa estaba la chauchera con la droga dosificada, ellos le preguntaron si tenía más droga y ella les dijo que sí, los llevó donde estaba la marihuana que tenía para los dolores de su madre y de ella, y ella al principio no dijo que era de ella, cuando les

entregó todo se acabó el procedimiento y la llevaron al cuartel. Sobre el cargador, no sabía que era de pistola, porque ella no sabe de armas, cree que pudo haberlo llevado su sobrino porque él juega con pistolas de balines, y ese día fue a la casa. Su sobrino estaba con sus amigos jugando a la vuelta con esas pistolas de balines. El cargador lo encontraron en una caja donde guardaba cachureos, su dormitorio no es que pase cerrado, cualquier persona pudo haber entrado porque a su casa llegan visitas. Cuando los policías le preguntaron por el cargador les dije que era de juguete, porque eso pensaba, ya que nunca había tenido armas en su casa.

Afirmó que es diabética e hipertensa, su madre también y además tuvo una operación de aneurisma, desde el 2010, entonces los medicamentos no le hacían efecto, y había escuchado que la infusión de marihuana permitía que durmiera bien y le hicieran mejor los medicamentos, por eso la marihuana estaba dosificada porque era una bolsa para cada día. Su madre y ella padecen de neuropatía diabética, los dolores son internos, y desde que empezaron a tomar esas infusiones estaban mejor de los dolores, a su amigo enfermero de nombre Fabian Jeréz le preguntó también y él le dijo que también había escuchado de pacientes a quienes el agua de marihuana les hacía bien porque era más natural que las pastillas. Ella tiene diabetes desde el año 2007, y la neuropatía desde el 2017, es insulino dependiente y toma muchas pastillas. La mamá no siente ni tiene movimiento del lado derecho de su cuerpo, pero el doctor le dijo que igual sentía dolores. Su mamá murió hace un mes por shock séptico. La marihuana encontrada eran 8 bolsitas, no sabe cuánto pesaba, ella la había comprado para la semana completa, ocupaba una bolsita diaria, de pasta base encontraron en el dormitorio de su mamá 7 bolsas, pesaron 270 gramos aproximadamente según lo que le dijo la policía. Esa droga la había recibido hace poco, compraba poco, pero como tenía una deuda muy grande entre la luz y el agua, pensó que si recibía algo más podía tener más facilidades para pagar, ella vendía la droga a \$1000 cada dosis, en su domicilio. En el comedor encontraron además 50 mil pesos, en el dormitorio tenía 30 mil más 100 mil según lo que cree. En su domicilio vivía su madre, ella y su hermana Lorena Trujillo, que iba y venía, porque estaba un tiempo con ella y otro tiempo con sus suegros que vivía en la playa, eso pasaba porque ella se llevaba muy mal con su cuñado Maycol Ibarra. Su sobrino Iván tenía 10 años en esa fecha, ahora tiene 11, él iba con sus amiguitos, iban a su casa porque tenía un patio grande, tenía cama elástica, y él dormía con ella. Su casa tiene 4 dormitorios,

3 armados y uno nuevo, el de su hermana y el suyo están a mano derecha, el de la mamá a mano izquierda, el cargador que encontraron estaba en su dormitorio, dentro de una caja, en su velador, en esa caja había pinches, hilos, cachureos, es un velador que está al lado de su cama sin llave, ella sabía que estaba ese cargador ahí pero pensaba que era de juguete.

Precisó que el día de su detención se encontraba su madre y su ahijada Francesca Cofré, a ella no se la llevaron detenida ni le incautaron nada, le revisaron el vehículo de la ahijada pero no encontraron nada. El domicilio es de propiedad de su madre, a ella tampoco se la llevaron detenida, los funcionarios solo conversaron con ella y a su ahijada solo le pidieron los datos y las llaves del auto para revisarlo. Ella dijo que era la dueña de casa porque su madre era ciega y estaba muy enferma

QUINTO: Convenciones probatorias. Que en el auto de apertura se dejó constancia que las partes no arribaron a convenciones probatorias

SEXTO: Prueba de la Fiscalía. Que para establecer la concurrencia de los elementos del delito materia de la acusación, y comprobar la participación del acusado, el Ministerio Público presentó la siguiente prueba:

A) Prueba Testimonial, consistente en los asertos de las personas que se individualizarán, quienes prestaron juramento o promesa de decir verdad conforme a lo previsto en el artículo 306 del Código Procesal Penal, quedando sus individualizaciones y las declaraciones de todos los deponentes, íntegramente consignadas en el registro de audio:

1.- JORDAN ANDRES MANRIQUEZ GUAJARDO, Subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en Fernández Albano N°172, La Cisterna, quien refirió, en lo medular, que participó en una entrada y registro a un inmueble ubicado en avenida Coronel de la comuna de La Granja, esa investigación estaba a cargo del subcomisario Víctor Valladares, perteneciente del equipo Microtráfico de la Brigada de Investigación Criminal de San Ramón. Dando cumplimiento a una orden en otra investigación, al transitar por calle Coronel observaron movimientos atribuibles a la venta de una sustancia ilícita, por lo que dieron cuenta de la situación a la Fiscalía. No recuerda la numeración del domicilio, era a la altura del 8000 en calle Coronel, una casa de un piso orientada de oriente a poniente, con un cierre perimetral de una reja color negro, una plancha metálica color negro, con una puerta abatible hacia el interior, en cuyo exterior había un vehículo marca

Volskwagen marca Voyage. Se hace una agrupación de causas con otras denuncias del sector y se envía un oficio denuncia a la Fiscalía para poder realizar la investigación, solicitaron una orden de investigar y en primer lugar realizaron una inspección ocular del sitio del suceso, eso fue el 17 de enero de 2022, luego se efectuaron vigilancias discretas el 18 de enero, luego con la autorización de la fiscal la figura del artículo 25 de la Ley N°20.000. El vehículo avistado afuera del domicilio estaba a nombre de Lorena Trujillo. El 18 de enero se observó que personas con características típicas de consumidores de droga concurrían al antejardín del domicilio e ingresaban al mismo, luego de unos minutos se iban con objetos pequeños, en forma rápida y en estado alerta, esa acción fue en varias ocasiones. El 25 de enero se realizó la técnica de agente revelador, él en compañía de Víctor Valladares y el Inspector Matías Martínez, en un vehículo policial fueron a la inmediaciones del domicilio donde el agente revelador desciende del vehículo para realizar la compra, ingresar al domicilio, luego sale de éste y retorna al vehículo. Al objeto que le fue entregado en la compra se le realizó prueba de campo, arrojando azul positivo a la presencia de pasta base de cocaína. A la pregunta de quien fue la persona que le vendió la droga al agente revelador, indicó que el agente visualizó una persona de sexo femenino de contextura gruesa que no fue identificada.

Agregó que se le comunicó en el informe policial a la fiscal el resultado de estas diligencias, por lo que se solicitó se gestionara con el tribunal correspondiente la entrada y registro al inmueble a la cual se dio cumplimiento el 2 de marzo de 2022, donde le correspondió cumplir una labor de vigilancia y posteriormente debió pesar la droga incautada. La sustancia a granel dubitada como cocaína base pesaba 270 gramos y fracción aproximadamente, los envoltorios de cocaína base, alrededor de 8 gramos y los 8 envoltorios de cannabis pesaron 8 gramos aproximadamente. No ingresó al domicilio, y supo que en el procedimiento se detuvo a Valeria Trujillo.

Puntualizó que en el domicilio vivían tres personas, Lorena y y otra más que no recuerda el nombre, pero pudieron ver entrada y salida de personas sin poder saber si otras personas más vivían en esa casa o si sólo iban a comprar droga, ese día sólo se detuvo a una persona, no recuerda cuantas personas estaban en el interior en esa oportunidad.

A las consultas aclaratorias del Tribunal, mencionó que el domicilio quedaba en la población Millalemu de la comuna de La Granja.

2.- VICTOR ADOLFO VALLADARES LEAL, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en Fernández Albano N°172, La Cisterna, quien manifestó, en síntesis, que le correspondió participar en la detención de la acusada. La investigación tuvo lugar el año 2021, en el mes de julio, donde se gesta la orden de investigar en la cual se da conocimiento de hechos constitutivos de tráfico de drogas a través de denuncia seguro. El 11 de enero del 2022 esa causa se agrupa con una denuncia de ellos que iniciaron por oficio reservado, donde denunciaron actividades de tráfico de drogas en el domicilio de calle Coronel 8786, comuna de La Granja, perpetrado por dos personas de sexo femenino, contextura gruesa. La información que mantenían era de años atrás, ya se había realizado una diligencia en ese domicilio con resultados positivos. El 17 de enero se realizó una inspección ocular del sitio del suceso, donde se determinó que dichas personas estaban habitando actualmente ese domicilio, también la acusada, el día 18 del mismo mes se determinó que habían actividades ligadas al tráfico de pequeñas cantidades drogas con transacciones de objetos de pequeñas dimensiones; luego se obtuvo la autorización de agente revelador, la cual se materializó el 25 de enero.

Aclaró que le correspondió actuar de agente revelador, por lo que se dirigió al inmueble, procedió a abrir la puerta de acceso peatonal, la cual se mantenía abierta sin seguro, donde se realiza una transacción de \$1.000 para solicitar una “pasta”, esa transacción se efectuó por la ventana que se ubicaba al lado de la puerta principal, moviendo la cortina, pudiendo ver que la persona que le vendió era una mujer de contextura gruesa, pero no pudo identificarla en ese momento dado que la venta se hizo por el ventanal y no fue posible ver a la persona, solo sus rasgos físicos. En base a eso, el 15 de febrero de 2022 se solicitó la entrada y registro para ese inmueble, se hizo efectivo el 2 de marzo del mismo año. En horas de la tarde se ingresó al inmueble donde se encontró a la imputada Valeria Trujillo Rivas, además estaba su madre, en el living comedor, había otra persona pero no recuerda el nombre. Cree que esa persona era del círculo familiar. Detalló que lo primero que encuentran es la imputada sentada en el living comedor al lado de la mesa donde habían 55 envoltorios de papel blanco contenedores de cocaína base, que pesó 8 gramos y fracción, además había dinero en efectivo. En el living comedor había un cuaderno con papeles recortados frecuentemente utilizado para la dosificación de la droga. En la habitación de la imputada se encontraron 8 envoltorios plásticos transparentes contenedores de una sustancia dubitada como

cannabis sativa que pesó 8 gramos y fracción. A su vez, en la misma habitación habían 7 envoltorios transparentes contenedores de cocaína base que pesaron 276 gramos y fracción, y una caja de zapatos en cuyo interior se encontró un cargador de pistola de 9 mm, el que no estaba a simple vista. También había dinero en efectivo. Solo fue detenida Valeria Trujillo, por cuanto era el blanco investigativo, además la acusada había sido divisada junto a su hermana en las vigilancias, pero el día de la detención sólo estaba ella.

A la consulta de la defensa de la cantidad de personas que vivían en el domicilio, sostuvo que había personas que iban rotando pero de manera constante estaba Valeria, su madre y su hermana, cuyo nombre no recordó. Aseveró que en la casa estaba el living comedor, el dormitorio de Valeria, que la cocaína base en bolsas estaba en un dormitorio colindante, y que no se incautó nada en los otros dormitorios. No recuerda que más había en la caja de zapatos. En la pieza de Valeria había fotos de la imputada y ropa, se le preguntó a Valeria si la droga era de ella y dijo que sí. No recuerda si ésta padecía de alguna enfermedad, ni si declaró antes. Contrastado con su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones, agregó que la acusada dijo padecer de diabetes. La investigación original era por casas cercanas donde se denunciaba venta de droga, pero se descartó el ilícito en esos domicilios. Las personas que fueron individualizadas en las vigilancias como las vendedoras de droga era la acusada y su hermana que no estaba en el domicilio el día de los hechos, y en vigilancias se observó movimientos relacionado con la comercialización de droga en el domicilio. El vio a menores de edad en el domicilio, pero no sabe si eran familiares de la acusada o no. Valeria señaló estar a cargo del inmueble.

B) Prueba pericial.

1.- HUGO MARIO CHAMORRO CARRASCO, técnico perito balístico de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en avenida La Oración N°1271, comuna de Pudahuel, en reemplazo de Roberto Jiménez Silva, según lo autorizado en audiencia del 10 de agosto de 2023, quien indicó que su colega perició un cargador de pistola de 9mm color negro el cual estaba bajo la NUE 6163855, en cuyo interior efectivamente había un cargador color negro calibre 9x19 para pistola, en la revisión exhaustiva se determinó que era marca Taurus, y que le hace a la pistolas modelos PT92, PT99 y PT917, de la misma marca. Su capacidad era para 17 cartuchos 9x19 y estaba apta para uso.

La fiscal le exhibió prueba material ofrecida en el N°7, describiendo el perito que corresponde a la cadena de custodia 6163855, en cuyo interior se contiene el objeto periciado, de acuerdo al oficio y fotografías que tomó el perito Jiménez.

A la pregunta del tribunal, aclaró que en el informe no se indica la forma en que se llegó a las conclusiones de la pericia, y que observando el objeto que se le exhibió éste señala PT02, PT99 y PT917, pero el informe no decía como determinó que era compatible con estos modelos de pistolas Taurus.

A la consulta de la fiscal de cuál es la forma en que generalmente hacen este tipo de peritajes de cargador, si se usa o como se determina que es apta para el uso o no, precisó que se determina que es apta porque es un cargador convencional y tiene la capacidad de los cartuchos que indica, tiene la procedencia y trae los modelos con los que puede ser compatible, se hace un peritaje ocular porque no tienen todos los modelos de las armas. Añadió que se puede determinar que no es apto para el uso por algún daño externo o alguna dimensión externa, lo que él vio en el informe es que el colega, para establecer la cantidad de cartuchos, pese a que dice que es para 17 cartuchos, "igual uno le introduce" los cartuchos en el cargador, los cuales eran de 9x19, siendo aptos para ser utilizados para el tipo de pistolas que refirió. La forma en que se establece la aptitud del cargador es distinta a la del arma, no obstante que si tuvieran un arma que sea del modelo indicado ven si es compatible o no, en este caso no había un arma para ver la compatibilidad directa, solamente con el cartucho, en este caso solo aparecía rotulado por la fábrica a compatibilidad con armas que el cargador indica.

2.- Pericia de la droga incautada, realizada por **RENÉ ROCHA BARRASA**, perito químico del Instituto de Salud Pública, correspondiente al Protocolo de Análisis Químico, del Subdepartamento de Sustancias Ilícitas, de fecha 18 de marzo de 2022, referente al código de muestra 1543-2022-M1-1, Acta de Recepción de la droga incautada N° 607-2022 de fecha 26 de enero de 2022, sobre NUE 6163825, Reservado n° 1543-2022 e Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de cocaína, la que fuera incorporada conforme lo dispone el artículo 315 del Código Procesal Penal.

3.- Pericia de la droga incautada, realizada por **BASILIO CHICAHUAL CANIUPÁN**, perito químico del Instituto de salud Pública, correspondiente al Protocolo de Análisis Químico, Subdepartamento de Sustancias Ilícitas, de fecha 15 de marzo de 2022, referente al Código de Muestra 3201-2022-M1-2 (NUE 6163848) cocaína base de 74% y 3201-2022-M2-2 (NUE 6163856). cocaína base

75%, Acta de Recepción de la droga incautada n°1442-2022 de fecha 03 de marzo de 2022, sobre NUE 6163848 y 6163856, Reservado N° 3201-2022, e Informe de Efectos y Peligrosidad para la salud pública de la cocaína base, incorporada conforme lo previsto en el artículo 315 del Código Procesal Penal.

4.- Pericia de la droga incautada, realizada por **GONZALO SANHUEZA GARRIDO**, perito bioquímico del Servicio de Salud Metropolitano Sur, correspondiente a Boletín de Muestra de la droga incautada de fecha 16 de marzo de 2022, sobre muestra N°so029736 (NUE 6163852), Acta de Recepción de la droga incautada de fecha 03 de marzo de 2022, N°so029736 sobre NUE 6163852, Reservado N° 6691, e Informe sobre peligros para la salud pública de la cannabis sativa (marihuana), la que fuera rendida conforme lo dispone el artículo 315 del Código Procesal Penal.

C) Prueba documental:

- 1.- Oficio Remisor de Droga N° 27 de fecha 25 de enero de 2022, dirigido al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, respecto de la NUE 6163825.
- 2.- Oficio Remisor de Droga N° 64 de fecha 02 de marzo de 2022, dirigido al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, respecto de las NUE 6163848 y 6163856.
- 3.- Oficio Remisor de Droga N°65 de fecha 02 de marzo de 2022, dirigido al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, respecto de la NUE 6163852, que corresponde a 8 bolsas contenedoras de cannabis sativa.
- 4.- Oficio DGMN.DECAE N°6442/912/2022, de fecha 08 de marzo de 2022, de la Dirección General de Movilización Nacional.
- 5.- Certificado de depósito a plazo reajutable en UF por la suma de \$107.000.
- 6.- Certificado de depósito a plazo reajutable en UF por la suma de \$30.000.
- 7.- Certificado de depósito a plazo reajutable en UF por la suma de \$57.000.

D) Prueba material:

- 1.- Un cargador de pistola NUE 6163855.

SÉPTIMO: Prueba de la defensa. Que, por su parte, la defensa, para acreditar sus alegaciones, se valió de las mismas piezas de convicción rendidas por el Ministerio Público, haciendo uso en su oportunidad de la facultad de contrainterrogar a los testigos y de examinar los otros medios de prueba, documental y pericial allegados al juicio. Además rindió prueba propia consistente en los atestados de:

- 1.- FABIAN ENRIQUE JEREZ ESPINOZA, enfermero, domiciliado en San Luis de Macul N° 4680, Peñalolén, quien relató, en resumen, que conoce a la familia de la imputada desde hace varios años, a la madre -a quien le dice "tía"- y a las dos

hermanas que se llaman Lorena y Valeri. Ha ido a su casa, pero no recuerda la dirección, pero quedaba en La Granja, es una casa con 3 habitaciones. Sabe que la "tía" y Valeri sufren de diabetes mellitus, con requerimiento diario de insulina. No sabe si en esa casa había droga. Valeria le preguntó si había escuchado de algún medicamento natural para el tratamiento de los dolores de la diabetes, le contó que había oído del tratamiento medicinal de la cannabis en infusiones, de pacientes que la usaban para el dolor. No sabe que pasó con esa conversación después, supo que la acusada estuvo detenida, en esa casa quedaron la mamá y la hermana. No sabe si Valeria tenía alguna pareja, la tía sabe que no tenía pareja.

B) DOCUMENTAL:

- 1.- Informe Hospitalario de fecha 4 de mayo de 2023.
- 2.- Ficha Clínica Nº 120143 respecto de atenciones de salud recibidas entre el 27 de octubre de 2009 al 5 de diciembre de 2022.

OCTAVO: Elementos de los tipos penales. Que para configurar el delito de tráfico de drogas, materia del juicio, se requiere probar que la acusada realizó acciones de tráfico de las señaladas en el artículo 3 de la Ley 20.000, específicamente en este caso, poseer sustancias estupefacientes o psicotrópicas de aquellas referidas en el artículo 1º de la norma citada, contenidas a la vez en el Reglamento de dicha legislación, todo ello sin la autorización competente.

Por otro lado, respecto del delito de tenencia ilegal de partes o piezas de armas de fuego, se requiere para su conformación que el agente incurra en la conducta típica, la cual corresponde a la de tener, entendida igualmente como mantener o poseer el objeto material, de tal manera que se tenga un alto grado de disponibilidad de la misma. En cuanto al objeto material, en el caso *sub lite*, corresponde a partes o piezas, comprendidas por el artículo 2 en su letra b) de la Ley 17.798. Lo anterior, sin perjuicio de requerirse además probar determinados elementos que permiten identificar la potencialidad lesiva del elemento que se posee, para el bien jurídico.

NOVENO: Análisis y valoración de la prueba. Que en primer lugar, cabe señalar que las premisas fácticas contenidas en la acusación del Ministerio Público dicen relación con diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones, que condujeron a que el 2 de marzo de 2022 se incautara droga en el domicilio de la acusada.

Que como se adelantó en el veredicto, la prueba rendida por el órgano persecuidor fue inapta, a la luz del estándar que exige el artículo 340 del Código Procesal

Penal, para que el tribunal tuviese por probados los presupuestos fácticos respecto de la imputación formulada a Trujillo Rivas por la tenencia del cargador del arma de fuego, en tanto, si fue suficiente en orden a tener por acreditadas las acciones imputadas referentes a la posesión de la droga incautada.

I.- En relación al delito de tráfico ilícito de drogas:

a) Circunstancias temporo-espaciales: A juicio de estos sentenciadores, se encuentran acreditadas las circunstancias temporo-espaciales contenidas en el libelo acusatorio, habiendo sido contestes los testigos de cargo que el día 2 de marzo de 2022, en horas de la tarde, personal de la Brigada de Investigación Criminal de San Ramón ingresó al domicilio de la acusada, precisando Víctor Valladares que se encontraba ubicado en calle Coronel N°8786 de La Granja, no existiendo discusión entre los intervinientes sobre este aspecto.

b) Objeto material: Que para acreditar que la evidencia incautada en el domicilio de calle Coronel N°8786 de La Granja, así como la dosis personal comprada por el agente revelador, corresponden a alguna de las sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública, el ente persecutor introdujo prueba pericial, sin embargo parte de dicha prueba, como las actas de recepción, reservados remisores del protocolo e informes de peligrosidad serán valorados por este tribunal como prueba documental, por cuanto dan testimonio de hechos y se aviene a su verdadera naturaleza.

En cuanto a su respectiva valoración y dañosidad, en primer lugar y referente a la dosis comprada por el agente encubierto, se contó con prueba pericial emanada del profesional del Instituto de Salud Pública, René Rocha Barrasa, correspondiente a Protocolo de Análisis químico, de fecha 18 de marzo de 2022, respecto de código de muestra_No 1543-2022-M1-1, remitido a la Fiscalía mediante Oficio Reservado N°1543-2022 suscrito por Iván Triviño A., del Instituto de Salud Pública, que dan cuenta que tras realizar a la muestra enviada para análisis los procedimientos de cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama y espectroscopía raman, se concluyó que la sustancia corresponde a cocaína en una concentración no inferior al 5% de pureza, lo que refrenda los dichos de Víctor Valladares, quien, como agente encubierto, realizó la compra pidiendo “una pasta”, y con lo sostenido por Jordan Manríquez, quien practicó la prueba de campo a la sustancia incautada, todo lo cual se aúna al informe de

peligrosidad de la cocaína base, en cuanto se consignan en ellos los graves efectos que la misma producen en la salud de las personas; y con el Acta de Recepción N°607-2022 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Oficio remitir N°27 de 25 de enero de 2022 en los cuales se deja registro de la entrega al Servicio de Salud por la BICRIM San Ramón de un papelillo de una sustancia descrita como polvo beige, dubitada como cocaína, que pesó 0,2 gramos bruto, NUE 6163825.

En relación a las sustancias incautadas en el inmueble, se allegó prueba pericial emanada del profesional de la Unidad de Laboratorio Clínico del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, BQ. Gonzalo Sanhueza Garrido, correspondiente a Ord. N°50065 del 16 de marzo de 2022, que contiene el análisis químico de la NUE 6163852, correspondiente a la muestra N°so029736, remitido a la Fiscalía mediante Reservado N°6691 del 3 de junio del 2022, suscrito por Fernando Betanzo Vallejos del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, los que dan cuenta que tras realizar a la muestra enviada para análisis los procedimientos de observación macroscópica y microscópica y prueba fast blue, se concluyó que la sustancia corresponde a cannabis sativa (marihuana) con presencia de principios activos (cannabinoides), antecedentes que al emanar de un profesional calificado de la especialidad y fundarse en análisis científicos producen convencimiento al respecto; lo que además resultó reforzado con los asertos del funcionario de la Policía de Investigaciones Víctor Valladares, en cuanto dio cuenta de haberse incautado en el dormitorio de la encartada 8 bolsas de nylon transparente contenedoras de una sustancia con características similares a la cannabis que arrojó un peso de 8 gramos y fracción, sumado al informe de peligrosidad de la cannabis sativa (marihuana), en cuanto se consignan en ellos los graves efectos que la misma producen en la salud de las personas, y con el Acta de Recepción N°so029736 del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Oficio remitir N°65 del 2 de marzo de 2022 en los cuales consta que se recibe por dicha entidad el decomiso mencionado, el cual arrojó un peso bruto de 8,7 gramos y neto de 6,2 gramos, correspondiente a un hierba seca molida dubitada como cannabis sativa. Asimismo, se introdujo pericia emanada del profesional del Instituto de Salud Pública, Basilio Chicahual Caniupán, correspondiente a Protocolo de Análisis químico de fecha 15 de marzo de 2022, respecto de código de las muestras No 3201-2022-M1-2 y M2-2, remitido a la Fiscalía mediante Oficio Reservado N°3201-2022 suscrito por Iván Triviño A., del Instituto de Salud Pública, que dan cuenta

que tras el análisis se concluyó que la sustancias corresponden a cocaína base del 74% y 25%, lo que es compatible con los dichos de Víctor Valladares, quien refirió que en el domicilio de la acusada, específicamente sobre la mesa del comedor, se incautó 55 papelillos de una sustancia dubitada como pasta base de cocaína, la cual pesó 8 gramos y fracción, y que en un dormitorio de la vivienda se encontraron 7 envoltorios transparentes contenedores de cocaína base que pesaron 276 gramos y fracción”, sumado al informe de peligrosidad de la cocaína base, en cuanto se consignan en ellos los graves efectos que la misma producen en la salud de las personas; y con el Acta de Recepción N°1442-2022 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y Oficio remisor N°64 del 2 de marzo de 2022, en los cuales consta la entrega y recepción en dicha entidad de las NUES 6163848 y 6163856, consistentes en 55 papelillos contenedores de un polvo blanco dubitado como cocaína, y 7 bolsas de nylon con un polvo beige, dubitado como cocaína, que pesaron 8,4 gramos bruto (2,8 gramos neto) y 275,5 gramos bruto (no indica peso neto), respectivamente.

Por otro lado, todos estos antecedentes probatorios permiten relacionar directamente las sustancias incautadas con aquéllas que fueron remitidas para su análisis al Servicio de Salud e Instituto de Salud Pública; antecedentes que se estiman como suficientes para acreditar los hechos por ser sus contenidos coincidentes con lo expuesto por los testigos de cargo y lo consignado en los informes emanados de los profesionales químicos.

c) Conducta atribuida: Al efecto, los testigos Valladares Leal y Manríquez Guajardo aseveraron en juicio haber tomado conocimiento de la existencia de una investigación por el delito de tráfico de drogas en la cual se había denunciado por personal de la Policía de Investigaciones que en el domicilio de la acusada - referido en el punto anterior- se observaban movimientos asociados a la comercialización de droga.

Así, Jordan Manríquez explicó que con dicha información se hace una agrupación de causas con otras denuncias del sector y se envía un oficio a la Fiscalía solicitando una orden de investigar. Luego, el 17 de enero de 2022 realizan una inspección ocular del sitio del suceso, se efectuaron vigilancias discretas el 18 de enero, y con la autorización de la fiscal se realizó la figura de agente revelador el 25 del mismo mes, donde el agente revelador desciende del vehículo para realizar la compra, ingresar al domicilio, luego sale de éste y retorna al vehículo. Al objeto que le fue entregado en la compra se le realizó prueba de campo, arrojando azul

positivo a la presencia de pasta base de cocaína. A la pregunta de quien fue la persona que le vendió la droga al agente revelador, indicó que el agente visualizó una persona de sexo femenino de contextura gruesa que no fue identificada.

Agregó que se le comunicó en el informe policial a la fiscal el resultado de estas diligencias, por lo que se solicitó se gestionara con el tribunal correspondiente la entrada y registro al inmueble a la cual se dio cumplimiento el 2 de marzo de 2022, donde le correspondió cumplir una labor de vigilancia y posteriormente debió pesar la droga incautada. La sustancia a granel dubitada como cocaína base pesaba 270 gramos y fracción aproximadamente, los envoltorios de cocaína base, alrededor de 8 gramos y los 8 envoltorios de cannabis pesaron 8 gramos aproximadamente. No ingresó al domicilio, y supo que en el procedimiento se detuvo a Valeria Trujillo.

Lo anterior fue ratificado por Víctor Valladares quien refirió que la investigación se inició de la forma relatada por Maríquez, esto es a través de un oficio dirigido a la Fiscalía donde denunciaron actividades de tráfico de drogas en el domicilio de calle Coronel 8786, comuna de La Granja, perpetrado por dos personas de sexo femenino y contextura gruesa. Lo anterior motivó que el 17 de enero se realizara una inspección ocular del sitio del suceso, donde se verificó que las denunciadas estaban habitando ese domicilio, y el 18 del mismo mes se determinó que habían actividades ligadas al tráfico de pequeñas cantidades drogas porque observaron transacciones de objetos de pequeñas dimensiones; luego se obtuvo la autorización de agente revelador, la cual se materializó el 25 de enero. Explicó que le correspondió actuar como agente revelador, por lo que el día referido se dirigió al inmueble, procedió a abrir la puerta de acceso peatonal, la cual se mantenía abierta sin seguro, donde se realizó una transacción solicitando una “pasta” por la suma de \$1.000, interacción que se efectuó por la ventana que se ubicaba al lado de la puerta principal, moviendo la cortina, pudiendo ver que la persona que le vendió era una mujer de contextura gruesa, pero no pudo identificarla ya que la venta se hizo por el ventanal.

Agregó que en base a las diligencias el 15 de febrero de 2022 se solicitó la entrada y registro para ese inmueble, la cual se hizo efectiva el 2 de marzo del mismo año. En horas de la tarde se ingresó al inmueble donde se encontró a la imputada Valeria Trujillo Rivas, además estaba su madre, en el living comedor, había otra persona, pero no recuerda el nombre. Lo primero que encuentran es a la imputada sentada en el living comedor al lado de la mesa donde estaban a la vista 55 envoltorios de papel blanco contenedores de cocaína base, que pesó 8 gramos y

fracción, además había dinero en efectivo. En el living comedor había un cuaderno con papeles recortados frecuentemente utilizado para la dosificación de la droga. En la habitación de la acusada se encontraron 8 envoltorios plásticos transparentes contenedores de una sustancia dubitada como cannabis sativa que pesó 8 gramos y fracción. A su vez, en la misma habitación habían 7 envoltorios transparentes contenedores de cocaína base que pesaron 276 gramos y fracción, y una caja de zapatos en cuyo interior se encontró un cargador de pistola de 9 mm, el que no estaba a simple vista. También había dinero en efectivo. Solo fue detenida Valeria Trujillo, por cuanto era el blanco investigativo, la hermana no se encontraba en el domicilio el día de la detención.

Aclaró que la cocaína base en bolsas estaba en un dormitorio colindante, y que no se incautó nada en los otros dormitorios. En la pieza de Valeria había fotos de la imputada y ropa, se le preguntó a Valeria si la droga era de ella y dijo que sí.

Del tenor de los atestados de ambos funcionarios policiales, apreciado en conjunto con el merito de la prueba pericial analizada en la letra b) de este motivo, resultó acreditado que en el domicilio de calle Coronel N°8786 de la comuna de La Granja se había observado, previamente al día de la detención de la acusada, movimientos que podía atribuirse a transacciones de pequeñas cantidades de droga, pues ambos refirieron un movimiento de personas que llegaban al inmueble y permanecían allí por un breve espacio de tiempo, sumado a la compra de una dosis personal de cocaína que realizó Víctor Valladares, quien había sido autorizado como agente revelador, el día 25 de enero donde una persona de sexo femenino de contextura gruesa le hizo entrega de un papelillo previo pago de \$1.000.

Que si bien no fue probado que dicha persona haya sido la encartada, las diligencias efectuadas por la policía dieron cuenta de que en dicho domicilio se vendía droga, lo que motivó una orden judicial de entrada y registro, que se materializó el 2 de marzo de 2022, momento en el cual la acusada fue sorprendida manteniendo en su poder 55 envoltorios contenedores de cocaína base del 74% de pureza, los cuales se encontraban sobre la mesa del living comedor, permaneciendo la acusada al costado de dicha mesa según lo expuso el testigo Valladares, habiendo demás dinero en efectivo en dicho lugar como dan cuenta los tres certificados de depósito a plazo incorporados a juicio. Adicionalmente, en el dormitorio de la propia encartada, según lo aseveró Valladares dando razón de sus dichos por cuanto expresó que en esa dependencia habían fotos y ropa de Valeria

Trujillo, se mantenían guardadas 8 bolsas de 8,7 gramos de cannabis sativa, y que en una habitación colindante se encontraron 7 bolsas de nylon contenedores de 275,5 gramos bruto de cocaína base del 25% de pureza.

Lo anterior denota que la encausada se encontraba en posesión de dicha sustancia ilícita, y se encontraba en conocimiento de la guarda de la droga en todas las dependencias de su domicilio, las cuales estaban destinadas para su comercialización, lo cual es posible inferir de los sucesos previos al allanamiento y lo avistado por los funcionarios policiales respecto de movimientos en el domicilio de calle Coronel n°8786 atribuibles a transacciones de pequeñas dosis de droga, el hallazgo de dinero en el inmueble lo que se aviene con la venta de una dosis personal al agente revelador el día 25 de enero, con la presentación de la droga, esto es 55 papelillos dosificados que se encontraban en la mesa del comedor, donde también había dinero en efectivo, además de cannabis que estaba en el dormitorio de Trujillo y que se encontraba dosificada en 8 bolsas de nylon, y la droga a granel mantenida en otra dependencia, presumiblemente a la espera de ser dosificada, elementos que apreciados en su conjunto relacionan a la acusada directamente con las sustancias incautadas.

Que no obsta a dicha conclusión, la presencia, ya sea permanente o transitoria, de otras personas en la vivienda, por cuanto el lugar donde la encartada se encontraba al momento del ingreso de la policía, su proximidad con las dosis personales y el dinero, el hecho de hallar droga en su dormitorio y en otra habitación una sustancia a granel de las mismas características de las que Valeria Trujillo mantenía en la mesa del comedor, además del reconocimiento que la encartada realizó en estrados, permite excluir la posibilidad de que las sustancias ilícitas fueran dejadas en el domicilio por otras personas, sin el conocimiento de la acusada.

d) Elementos subjetivos del tipo y antijuridicidad: Asentado lo anterior, y en cuanto al análisis de los demás elementos del tipo penal cabe señalar que en el caso *sub lite*, la encartada además de estar en posesión de la droga, actuó con el ánimo o la motivación de traficar y poner en riesgo el bien jurídico protegido salud pública, colaborando directamente en la difusión de la droga, como se puede inferir, además, de la dinámica de días previos al allanamiento, que fueron detalladas por los funcionarios Valladares y Manríquez, y que dan cuenta de una actividad de suministro o venta a terceros de dosis de droga que se mantuvo en el tiempo de duración de la investigación policial en el domicilio de la encartada, sumado a las

evidencias incautadas, en especial, las sustancias ilícitas que se hallaban dosificadas en papelillos o bolsas de nylon.

Por otra parte, en cuanto al elemento normativo del tipo, asociado a la antijuridicidad, consistente en la inexistencia de autorización de la autoridad competente, se desprende principalmente del mérito del artículo 3 de la Ley 20.000 en relación con el artículo 1 de su respectivo reglamento, ya que la acusada no se encontraba en ninguno de los casos determinados por la ley en que la competente autorización procede justificando la realización de estas conductas en aras de otros intereses preponderantes, sin existir la posibilidad de afectar a la salud pública a través de su difusión incontrolable, por lo que debe determinarse que la posesión de la sustancia tenía un propósito ilícito, desprendiéndose el mismo de la cantidad, naturaleza y presentación de las drogas incautadas.

Respecto de las alegaciones de la defensa en cuanto a que la cannabis incautada se encontraba destinada al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, para disminuir los dolores de que encartada y su madre padecían por el cuadro de diabetes que les afectaba, se allegó prueba consistente en el atestado de Fabian Jeréz Espinoza, enfermero, quien expresó que conocía a la familia de la acusada, a su madre y hermana, que tanto la madre como Valeria Trujillo padecían de diabetes mellitus, y que ésta le había consultado si conocía algún tratamiento natural para los dolores de la diabetes, indicándole el testigo que algunos pacientes usaban infusiones de marihuana, desconociendo que ocurrió en relación a esa conversación. Además se adjuntó Informe Hospitalario del 4 de mayo de 2023 emanado del Alcaide (S) del Centro de Detención Femenino de San Miguel, el que indica que la encartada cuenta con antecedentes de diabetes mellitus grado 2 insulina, neuropatía diabética diagnosticada hace 3 años, e hipertensión arterial, diagnóstico que también se contiene -con excepción de la neuropatía-, en documento que fuera presentado como informe hospitalario y que resume atenciones de Valeria Trujillo, pero que no identifica el centro de salud en cuestión. Es del caso, que la prueba reseñada permite tener por establecido que la encartada padecía de diabetes mellitus con anterioridad a la fecha de su detención, sin embargo aquello no permitió al tribunal conocer las consecuencias o síntomas de dicho cuadro en relación con el dolor. Tampoco se contó con algún antecedente o indicación médica sobre el uso medicinal de la cannabis como tratamiento para la acusada. Por otro lado, la misma encartada refirió que estrados

que la cannabis estaba destinada al consumo de ella y su madre, lo que descarta el requisito del consumo personal.

De este modo se desestimará la pretensión de la defensa en cuanto a considerar que la marihuana incautada estaba destinada al uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo de la encartada, lo cual se descarta, igualmente, por cuanto existen en el caso *sub iudice* circunstancias indiciarias del propósito de traficar, al existir antecedentes probatorios sobre la venta de drogas en dosis personales en el domicilio de calle Coronel, como se indicó pormenorizadamente al analizar la conducta atribuída.

II.- En relación al delito de tenencia de partes o piezas de un arma de fuego:

Que en base al atestado del funcionario Víctor Valladares se pudo establecer que la acusada mantenía al interior de su domicilio, en específico de su dormitorio, dentro de un velador y una caja de zapatos, un cargador de pistola.

Además, se acreditó por el ente persecutor que Valeria Trujillo carecía de autorización para el porte o tenencia de armas de fuego, ello en virtud de Oficio de la Dirección General de Movilización Nacional N° 6442/912/2022, que en lo pertinente informa “*CONSULTA POR ARMA: VALERIA TRUJILLO RIVAS, RUN. N° 8.510.331-8. Conforme a la persona consultada, se puede informar que no se encuentra registrada en la base de datos de esta Dirección General de Movilización Nacional*”. Si bien la documental referida no dice relación directa con el cargador, dada la calidad de parte o pieza de éste de un arma de fuego, es posible inferir que la encartada no estaba autorizada ni para tener un arma ni una parte o pieza de la misma.

Ahora bien, se contó en juicio con el atestado del perito Hugo Chamorro Carrasco, en reemplazo del perito Roberto Jimenez que practicó el informe sobre el cual expuso, quien dio cuenta que su colega perició un cargador de pistola de 9mm color negro el cual estaba bajo la NUE 6163855, en cuyo interior efectivamente había un cargador color negro calibre 9x19 para pistola. En una revisión más exhaustiva se determinó que era marca Taurus, y que “le hace” a la pistolas modelos PT92, PT99 y PT917, de la misma marca. Su capacidad era para 17 cartuchos 9x19 y estaba apta para uso, reconociendo la evidencia material NUE 6163855 que se le exhibió en juicio. A las consultas efectuadas sobre la metodología empleada a objeto de concluir que el cargador se encontraba apto para su uso, refirió que en el informe no se indica la forma en que se llegó a las conclusiones de la pericia, pero que observando el objeto que se le exhibió (que en

esos momentos el perito mantenía consigo) en éste se señala “PT02, PT99 y PT917”, pero el informe no decía como determinó que era compatible con estos modelos de pistolas Taurus.

A la consulta que le realiza la persecutora indicó que generalmente se determina que es apta para el uso o no, porque es un cargador convencional y tiene la capacidad de los cartuchos que indica, tiene la procedencia y trae los modelos con los que puede ser compatible, se hace un peritaje ocular porque no tienen todos los modelos de las armas. Añadió que él vio en el informe que su colega, para establecer la cantidad de cartuchos, pese a que el cargador dice que es para 17 cartuchos, “igual uno le introduce” los cartuchos en el cargador, los cuales eran de 9x19, siendo aptos para ser utilizados para el tipo de pistolas que refirió.

Pues bien, del atestado brindado por el perito de reemplazo, no es posible esclarecer cual fue la metodología empleada por el perito Jiménez Silva para arribar a las conclusiones que consignó en su informe, por lo que el declarante no pudo más que dar respuestas generales de lo que “se hace” habitualmente. Sin embargo, precisó que el cargador no fue probado por cuanto no poseían en el Laboratorio de Criminalística los modelos de pistolas que -según la información de fábrica que el perito leyó del objeto que le fuera exhibido en juicio- eran compatibles con dicho artefacto. Respecto de la compatibilidad de este cargador con las pistolas PT02, PT99 y PT917 marca Taurus, esta información fue adicionada por el deponente de la lectura de la información de fábrica que se encontraba grabada en el propio cargador, por lo que no es posible considerarla como parte de la pericia, conforme se desprende de los artículos 315 y 329 del Código Procesal penal, por cuanto, si bien el perito tiene la obligación de declarar en juicio, en éste deben exponer el contenido y las conclusiones de *su informe*, o en este caso, del informe del perito a quien reemplazaba. Así, si bien resultó acreditada tanto la conducta prohibida correspondiente a la tenencia, no fue posible establecer que el objeto incautado corresponda a un cargador de arma de fuego, al no haberse probado suficientemente su compatibilidad con una pistola, ni que se encontraba apta para ser usada por un arma, lo que permitiría haber determinado que se trata de un elemento controlado por el artículo 2 letra b) de la Ley N°17.798. Tampoco se probó la idoneidad de dicho elemento para poner en riesgo el bien jurídico protegido cual es la seguridad colectiva o pública, ya que no se probó su funcionamiento ni se explicitó mayormente la razón por la cual el

examen externo del cargador permitía aseverar que ese encontraba en condiciones de ser usado.

Por todo anterior y no habiéndose satisfecho el estándar que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal respecto de la imputación efectuada por el Ministerio Público por este ilícito, corresponde –inexorablemente– la absolución de la acusada por la conducta atribuída en la acusación fiscal de tenencia de parte o pieza de arma de fuego.

DÉCIMO: Hechos acreditados y calificación jurídica. Que del análisis y valoración de la prueba rendida por el acusador, efectuada con libertad, conforme a lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal, pero sin contrariar la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, se puede establecer, más allá de toda duda razonable, que:

En virtud de una orden de entrada y registro autorizada judicialmente, funcionarios policiales, el 2 de marzo de 2022, en horas de la tarde, ingresaron al domicilio ubicado en calle Coronel N° 8786 de la comuna de La Granja, sorprendiendo a VALERIA ROMANÉ TRUJILLO RIVAS manteniendo en su poder 55 envoltorios contenedores de cocaína base con un peso bruto de 8.43 gramos y neto de 2,8 gramos, 8 bolsas de nylon contenedoras de cannabis sativa con un peso bruto de 8.7 gramos y neto de 6,2 gramos, además de 7 bolsas contenedoras de cocaína base con un peso bruto de 276.4 gramos.

Que los hechos referidos configuran el delito de **tráfico ilícito de drogas estupefacientes o psicotrópicas**, en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley 20.000, en relación al artículo 1° del mismo cuerpo legal.

Así, se desestimaré la calificación propuesta por la defensa en orden a estimar que los hechos configuraban el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga del artículo 4 de la Ley 20.000, por cuanto, considerando que se incautaron dos tipos de sustancias ilícitas, cannabis y cocaína, que la cocaína arrojó una pureza del 25 y 74%, la forma de comisión del delito y el pesaje de la droga que en total supera los 290 gramos bruto, no es posible estimar que la encartada traficó con pequeñas cantidades de droga, ni que se haya afectado en menor medida el bien jurídico protegido, en relación a las dosis personales que pueden obtenerse de la droga incautada, lo que demuestra su capacidad de difusión incontrolada.

UNDÉCIMO: Participación. Que, sin perjuicio que la participación de Valeria Trujillo Rivas en relación a los hechos acreditados, se analizó conjuntamente con los elementos configurativos del delito, no está de más indicar que la misma, ha

resultado justificada, más allá de toda duda razonable, con el mérito de la sindicación y reconocimiento directo que efectuaran los funcionarios Manríquez y Valladares, respecto de la droga incautada en el inmueble de calle Coronel N°8786 de la comuna de La Granja. Dichas declaraciones y sindicaciones, más el reconocimiento efectuado por la propia enjuiciada, quien a grandes rasgos manifestó haber tenido conocimiento del carácter ilícito de la cocaína que mantenía en su domicilio, la cual era para la venta al menudeo atendidas sus necesidades económicas, permiten dar por acreditada la hipótesis de autoría inmediata y directa, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

DUODÉCIMO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. En la audiencia citada, la fiscal adjuntó extracto de filiación y antecedentes de la acusada, en el cual registra una condena como autor de microtráfico en causa RIT 336/2018, dictada por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 29 de agosto de 2018, por la cual se le condenó a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y tres unidades tributarias mensuales, pena remitida, por lo que a su juicio concurre la agravante del artículo 12 N°16 del Código Penal. Para lo anterior, adjuntó copia autorizada de sentencia dictada por el 12 Juzgado de Garantía de Santiago el 29 de agosto de 2018, en RIT 336-2018, por hechos anteriores y coetáneos al 21 de marzo de 2018, y además allegó certificación de encontrarse firme y ejecutoriada. A su juicio no concurre la atenuante del artículo 11 N°9 del código punitivo, por cuanto la declaración de la encartada no aportó al esclarecimiento de los hechos. Por último, mantuvo su pretensión punitiva contenida en el libelo acusatorio.

Por su parte, la defensa solicitó se reconozca a su representada la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, pues ésta reconoció su participación en la venta de pasta base de cocaína y además el funcionario Víctor Valladares señaló que ella asumió ser la propietaria de dicha droga, por lo anterior, solicitó que se compense la atenuante con la agravante invocada por el Ministerio Público, pidiendo una pena de 5 años y un día, rebajando la multa a 3 UTM con pago en parcialidades, sin costas, abonando el tiempo en que ha permanecido privada de libertad en la presente causa. .

DECIMO TERCERO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que en virtud del extracto de filiación de la acusada, la copia autorizada de la sentencia dictada en causa RIT 336/2018, por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 29 de agosto de 2018, en la cual se le condenó a la pena de 61 días de

presidio menor en su grado mínimo y tres unidades tributarias mensuales, más el certificado de ejecutoria del fallo citado, se encuentra configurada la agravante de responsabilidad del artículo 12 N°16 del Código penal, al haber sido condenada la encartada por un delito de la misma especie.

Por otro lado, estos sentenciadores estiman que le beneficia la mitigante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos tras haber prestado declaración en estrados. En efecto, las verbalizaciones efectuadas por Trujillo Rivas contribuyeron al esclarecimiento de los hechos en forma sustancial, toda vez que se sitúa en el contexto espacio temporal acreditado en la presente sentencia, reconociendo su autoría respecto de la cocaína base, la cual iba a vender para pagar las cuentas, sumado a que el testigo Víctor Valladares sostuvo que la acusada señaló estar a cargo del inmueble. Todos estos aspectos fácticos permiten tener por configurada la atenuante contemplada en el N° 9 del artículo 11 del Código Penal.

DÉCIMO CUARTO: Determinación de pena y modalidad de cumplimiento. Que siendo la pena asignada por la ley al delito acreditado, la de presidio mayor en su grado mínimo a medio y concurriendo respecto de los encartados una circunstancia atenuante de responsabilidad y una agravante, de conformidad a lo prevenido en el artículo 68 del Código Penal éstas se compensarán, situándose la pena a imponer dentro del presidio mayor en su grado mínimo, en el quantum que se dirá en lo resolutivo, por estimar que la misma es proporcional en relación a los hechos asentados, considerando el gramaje, tipo del alcaloide y pureza.

Que atendida la extensión de la pena a imponer y lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N°20.000, no se concederán a la acusada penas sustitutivas de la Ley N°18.216, debiendo cumplir la pena a imponer de forma efectiva. Para dichos efectos, deberá considerarse el tiempo que la acusada ha permanecido ininterrumpidamente privada de libertad con ocasión de la presente causa, los que ascienden a **537 días**, sin perjuicio de lo que pueda disponer el tribunal de ejecución con mayores y mejores antecedentes.

DECIMO QUINTO: Multa y costas. Que, la situación personal y económica de la enjuiciada, derivado del largo lapso de privación de libertad a que ha estado sometida, más de 15 meses, constituye un antecedente que permite imponerle una pena pecuniaria en el mínimo y se le autorizará para su pago en parcialidades. Por idénticas consideraciones, y atendido que fue representada por la Defensoría Penal Pública, será eximida del pago de las costas del juicio. Asimismo, existiendo

motivo plausible para litigar respecto de la absolución por el ilícito de tenencia ilegal de partes o piezas de arma de fuego, se le exime del pago de las costas.

DECIMO SEXTO: Comiso. Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 20.000 se decreta el comiso de las especies incautadas, consistente en la droga y contenedores de la misma, además del dinero incautado, por las sumas que dan cuenta los certificados de depósito incorporados, debiendo otorgarle el destino que corresponda según su naturaleza y de acuerdo con las normas legales pertinentes.

Por estas consideraciones y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 9, 12 N°16, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 28 y 68 del Código Penal; artículos 1, 45, 275, 295, 296, 297, 325 y siguientes, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal; artículos 1, 3, 45, 52 y 62 de la Ley 20.000, artículos 2 y 9 de la Ley 17.798, se declara:

I.- Que se **ABSUELVE** a **VALERIA ROMANE TRUJILLO RIVAS**, cédula nacional de identidad N° 8.510.331-8, ya individualizada, del delito de tenencia ilegal de partes o piezas de armas de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9° en relación con el artículo 2 letra b) de la Ley 17.798, supuestamente ocurrido el 2 de marzo de 2022, en la comuna de La Granja.

II.- Que se **CONDENA** a **VALERIA ROMANE TRUJILLO RIVAS**, cédula nacional de identidad N° 8.510.331-8, ya individualizada, como **AUTOR** de un delito consumado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, del artículo 3 de la Ley 20.000, en relación al artículo 1 del mismo texto, descubierto el día 2 de marzo de 2022 en la comuna de La Granja, a sufrir la pena de **SEIS AÑOS** de presidio mayor en su grado mínimo, **MULTA de CUARENTA (40) unidades tributarias mensuales**, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

La pena privativa de libertad deberá ser cumplida en forma efectiva, sirviéndole como abono el tiempo en que ha permanecido ininterrumpidamente privada de libertad con ocasión de la presente causa, equivalente a **537 días**, sin perjuicio de lo que pueda disponer el tribunal de ejecución con mayores y mejores antecedentes.

III.- Que se autoriza a la sentenciada a pagar la multa impuesta en **DIEZ parcialidades** iguales, mensuales y sucesivas, de cuatro unidades tributarias mensuales cada una, pagadera, la primera, el último día hábil del mes siguiente a

aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia, y las restantes parcialidades en la misma fecha de los meses subsiguientes. El no pago oportuno de cualquiera de las cuotas hará exigible el total de la multa.

Si la sentenciada no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, con el acuerdo de la condenada.

IV.- Que se decreta el comiso del dinero y droga incautada, y contenedores de la misma.

V.- Que se exime del pago de las costas a la sentenciada y al Ministerio Público respecto de la decisión absolutoria.

VI.- Que, atento lo dispuesto en los artículos 5°, 16 y 17 de la Ley 19.970, y habiendo sido condenada la enjuiciada Valeria Trujillo Rivas por uno de los delitos previstos en la letra c) del inciso segundo del artículo 17 de la Ley N° 19.970, se ordena determinar, previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, la huella genética de la encausada para ser incluida en el Registro de Condenados, una vez que el presente fallo se encuentre ejecutoriado. Póngase lo previamente resuelto en conocimiento del Servicio Médico Legal y Gendarmería de Chile, en la oportunidad procesal correspondiente y para efectos de su cumplimiento.

Ofíciase en su oportunidad a los organismos que correspondan para hacer cumplir lo resuelto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Cumplase, oportunamente, con lo ordenado en el artículo 17 de la Ley N° 18.556.

Regístrese, notifíquese, remítanse los antecedentes necesarios al Señor Juez de Garantía para los fines pertinentes, y hecho, archívese.

Redactada por la Juez Sra. Javiera López Ossandón.

RUC N° 2100560953-1

RIT N° 276-2023

PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL SEXTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL, SR. JOSÉ RODRIGUEZ GUERRA, SRA. ESPERANZA CARMONA ARAYA Y JAVIERA LÓPEZ OSSANDÓN, EL PRIMERO EN CALIDAD DE TITULAR, Y LA SEGUNDA Y TERCERA COMO SUPLENTE.